



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión 03/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 25 de enero de 2006, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE ESTA COMISIÓN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2005, DICTADA COMO CONSECUENCIA DEL LANZAMIENTO POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET SOBRE TECNOLOGÍA ADSL2+ DENOMINADOS “X2+0705_A1” Y “ADSL TOP”.

En relación con la solicitud de suspensión incorporada al recurso potestativo de reposición interpuesto por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la citada Resolución de esta Comisión de 4 de noviembre de 2005, el Consejo de esta Comisión ha adoptado en su sesión núm. 3/06, la siguiente:

Resolución de 25 de enero de 2006, recaída en el expediente AJ 2005/1741.

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2005, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha dictado una resolución por la que, como consecuencia del lanzamiento por Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, TESAU) de los servicios de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ denominados “x2+0705_a1” y “ADSL TOP”, dispone que:

*“**Primero.** Esta Comisión no ha advertido la necesidad de paralizar en este momento la comercialización de los servicios de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ denominados “X2+0705_A1” y “ADSL TOP”, provistos en las coberturas de las centrales propuestas por TESAU.*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Segundo. *TESAU remitirá mensualmente a esta Comisión, en los términos fijados en el resuelve séptimo de la Resolución de 31 de marzo de 2004, por la que se modificaba la OBA, la siguiente información:*

- Número de clientes del servicio de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ denominado "ADSL TOP", desglosados por centrales.*
- Número de clientes del servicio de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ denominado "X2+0705_A1", desglosados por centrales.*
- Cobertura de centrales y concentradores donde TESAU esté en disposición de ofrecer servicios de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ como los denominados "X2+0705_A1" y "ADSL TOP".*

SEGUNDO.- Con fecha 19 de diciembre de 2005 ha tenido entrada en el registro de esta Comisión escrito de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (en adelante, ASTEL) por el que se interpone recurso de reposición contra la Resolución de 4 de noviembre de 2005 antes mencionada.

En el escrito de interposición presentado, TESAU efectúa, esencialmente, las siguientes alegaciones:

- Que la Resolución de 4 de noviembre es nula de pleno derecho de conformidad con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC) que establece que serán nulos los actos "*dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido*" ya que debería haberse seguido el procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTEL) para la definición de mercados y modificación sustancial de las obligaciones a TESAU.
- Que la Resolución de 4 de noviembre es anulable de acuerdo con el artículo 63.1 de la LRJPAC por vulnerar el principio de no discriminación; asimismo, alega que las ofertas presentadas por TESAU no son replicables vulnerando resoluciones anteriores de esta Comisión.
- Que la Resolución de 4 de noviembre es anulable de acuerdo con el artículo 63.2 de la LRJPAC por falta de motivación suficiente y por producirle indefensión.

Asimismo, ASTEL solicita que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la LRJPAC y en el artículo 31 del Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se adopte la siguiente medida cautelar:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que se autorice a TESAU a prestar servicios minoristas basados en ADSL2+ en ausencia de modalidad equivalente GigADSL únicamente en el ámbito geográfico de aquellas centrales en que se cumplan las siguientes condiciones:

- que se encuentren cubiertos al menos 3 operadores que hayan desagregado ya algún par de cobre.
- que dichas centralitas reúnan una serie de condiciones que señala en el Fundamento Jurídico Segundo del recurso, entre las que destacan las siguientes:

- que dispongan de un espacio disponible para la incorporación de más operadores.

- que el RPCA de cada central no se encuentre saturado.

- que en dicha central no se haya sufrido un retraso en más de un determinado porcentaje de los casos por los operadores en ninguno de los últimos tres meses en la provisión de alguno de los servicios ofrecidos para el acceso al bucle en el ámbito de la OBA.

- A estos efectos, TESAU deberá publicar bajo supervisión de la Comisión un listado de las centralitas que reúnan dichas condiciones.

Juntamente a la adopción de esta medida cautelar, ASTEL solicita la suspensión de la Resolución de 4 de noviembre hasta que se publique la lista anterior y hasta que se restrinja el efecto de esa resolución a esas centrales.

A los anteriores antecedentes de hecho les son aplicables los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para resolver.

En virtud de lo establecido en el artículo 116.2 de la LRJPAC, los actos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

La adopción de las medidas cautelares solicitada por la recurrente corresponde al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya que de acuerdo con el artículo 72.1 de la LRJPAC *“iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello”*. Específicamente, respecto de la suspensión de los actos recurridos, el artículo 111.2 de la LRJPAC atribuye la competencia para resolver, también, al órgano a quien compete resolver el recurso.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En consecuencia, corresponde al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la competencia para resolver la solicitud de ASTEL sobre la adopción de medidas cautelares, incluida la suspensión cautelar de la resolución recurrida, por ser el órgano que dictó el acto impugnado.

Segundo.- Sobre la solicitud de ASTEL de adopción de medidas provisionales.

ASTEL solicita en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 4 de noviembre que se adopten una serie de medidas cautelares positivas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en el marco de este expediente.

Debe recordarse que la resolución recurrida tiene una naturaleza esencialmente negativa, al decidir no intervenir ni impedir las ofertas comerciales comunicadas por TESAU. Este carácter negativo obliga necesariamente a cualquier tercero que quiera su rectificación a solicitar de la autoridad correspondiente no sólo la anulación de dicha resolución, sino el total restablecimiento de la situación jurídica individualizada, lo que exige una medida positiva sustitutiva de la decisión previa de no impedir la comercialización del producto comunicado por TESAU. Es decir, que frente a la decisión de no impedir dicha comercialización, la conducta demandada por el interesado no puede ser la mera suspensión de dicha decisión, ya que un acto negativo como éste no puede ser por su naturaleza suspendido, puesto que no modifica la situación de hecho existente. Tampoco bastaría con pedir su anulación, pues la mera declaración de nulidad de dicha resolución sólo supondría dejar sin efecto la decisión, sin paralizar la promoción comercial denunciada por el interesado. Frente a dicha decisión sólo cabe una resolución positiva, que altere la situación de hecho, consistente en ordenar la paralización de la oferta comercial de TESAU. Y para anticipar la posible resolución favorable del recurso, la única alternativa posible sería la de una medida cautelar positiva, del art. 72 de la LRJPAC.

De acuerdo con el artículo 72 de la LRJPAC, citado por la recurrente, se podrán adoptar las medidas provisionales que sean necesarias si existiesen elementos de juicio para ello. Asimismo, este artículo 72 añade en sus apartados tercero y cuarto que:

“3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.”

En resumen, de acuerdo con toda la normativa citada para la adopción de medidas cautelares por parte de esta Comisión es necesario que se cumplan ciertos requisitos:

- Que sean oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficientes para adoptarlas.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que no causen perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados.
- Que no impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

Por otro lado, tal y como figura en la Resolución de 4 de noviembre de 2005, con fecha 7 de octubre de 2005, ASTEL presentó un escrito de alegaciones al expediente de origen (DT 2005/1178).

En este escrito, ASTEL puso de manifiesto todo lo que ahora presenta como medida cautelar (página 4 de la Resolución de 4 de noviembre) así que esta Comisión ya ha tenido oportunidad de analizar y valorar la posibilidad de imponer estas condiciones en la resolución recurrida. A mayor abundamiento, señalar que ni han cambiado las circunstancias ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho nuevo que no se haya tenido ya en cuenta por esta Comisión.

A la vista de los hechos, no existen elementos de juicio que hagan necesario la adopción de una medida cautelar; teniendo en cuenta que el contenido de esta solicitud ya se tuvo en consideración por esta Comisión para dictar la resolución que ahora recurre.

Igualmente, la no consideración de las medidas propuestas de forma reiterativa por ASTEL no pone en peligro la eficacia de la resolución que pudiera recaer en el expediente de referencia.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de noviembre de 2003, ha determinado que:

«la finalidad legítima del recurso es, no sólo, pero sí prioritariamente, la efectividad de la sentencia que finalmente haya de ser dictada en él; de suerte que el instituto de las medidas cautelares tiene su razón de ser, prioritaria, aunque no única, en la necesidad de preservar ese efecto útil de la futura sentencia, ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo en que ha de desenvolverse el proceso lo ponga en riesgo, por poder surgir, en ese espacio temporal, situaciones irreversibles o de difícil o costosa reversibilidad.

La pérdida de la finalidad legítima del recurso es, así, la causa que legitima la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas, suficientes y no excesivas, para evitarla en el caso en concreto, valorando para ello, de manera circunstanciada, esto es, atendiendo a las circunstancias del caso, todos los intereses en conflicto (...).».

En definitiva, las medidas cautelares que propone ASTEL en el recurso se fundamentan en alegaciones ya presentadas a esta Comisión en el procedimiento que dio lugar a la resolución recurrida, y que ya fueron contestadas oportunamente. Teniendo en cuenta que no han cambiado las circunstancias que hagan cambiar de criterio a esta Comisión para la adopción de las mismas y que éstas no aseguran de una manera adicional la eficacia de la resolución que pudiera recaer en este



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

procedimiento, esta Comisión considera que la adopción de las medidas planteadas por ASTEL sería excesiva.

Tercero.- Sobre la petición de suspensión de la Resolución de 4 de noviembre de 2005.

De manera acumulada a las medidas cautelares positivas instadas por ASTEL, ésta pide la suspensión de la resolución recurrida. Ya se ha dicho que no cabe la suspensión de un acto de contenido negativo, dada su naturaleza. Pero es que además, la suspensión interesada es realmente, por aplicación del principio general administrativo de calificación (art. 110.3 LRJPAC), la misma medida cautelar analizada anteriormente, expuesta con otras palabras. Sólo por esto ya bastaría para desestimar la petición. Con todo, pasamos a analizar, a efectos dialécticos, la concurrencia de los requisitos para la suspensión.

Según lo establecido en el artículo 111.1 de la LRJPAC, la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien compete resolver el recurso podrá, en virtud del artículo 111.2 de la LRJPAC, suspender la ejecución del acto impugnado, *“previa ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido”*. Para ello, se señalan en el citado artículo dos circunstancias alternativas que deben concurrir para que sea posible la suspensión:

- a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la LRJPAC.

En aplicación del artículo citado, para determinar si procede o no acceder a la suspensión solicitada por la recurrente, habrá que analizar, en primer lugar, si concurre alguna de las circunstancias señaladas con las letras a) y b). En el caso de que se compruebe la concurrencia de alguna de ellas, deberá analizarse, en segundo lugar, si debe prevalecer el interés público o de terceros o el del interesado en la suspensión del acto, previa la ponderación razonada de los perjuicios que a unos y otros causaría la suspensión o la ejecución inmediata del acto recurrido.

a.-) Sobre los perjuicios de imposible o difícil reparación.

ASTEL alega de forma muy genérica que la resolución que recurre le causaría efectos de difícil o imposible reparación. La recurrente considera que con la citada resolución *“se impediría cualquier incremento de competencia en los mercados de referencia del futuro, trasladando TESAU su actual posición de dominio en las redes fijas tradicionales y en los servicios prestados a través de ellas al as redes fijas que se utilicen nuevas tecnologías como la ADSL+2 de manera definitiva e irreversible”*.

Resulta necesario que el hipotético perjuicio sea manifiesto y concreto, con el fin de su valoración por el órgano competente para resolver el correspondiente recurso, en



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

orden a ponderar el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión pretendida y el perjuicio que causaría a la recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido, según dispone el citado artículo 111 de la LRJPAC.

A este respecto cabe señalar, entre otras, lo manifestado por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Auto de 26 de marzo de 1998:

*"No basta, por otra parte, que la petición de **suspensión** vaya acompañada de una expresa manifestación de los perjuicios irreparables que pudieran irrogarse al recurrente caso de no acordarse, siendo necesario según reiterada doctrina de esta Sala que se aporte al menos un principio de prueba de la sobreviniencia de tales perjuicios, o bien que la existencia de los mismos pueda deducirse de la naturaleza del acto impugnado, caso de no accederse a ella. Por otra parte, resulta absolutamente necesario que tales circunstancias sean patentes en el momento de la solicitud de **suspensión**."*

Además, ASTEL no aporta datos concluyentes ni incluye en su recurso razonamientos patentes y probados del perjuicio concreto que se alega sobre el carácter irreparable de los hipotéticos perjuicios producidos, cuya existencia no queda, por tanto, debidamente justificada, ni podría deducirse de la Resolución recurrida. No parece probable que la ejecución inmediata de la Resolución de 4 de noviembre pudiera causar perjuicios irreparables a la competencia del sector, mas bien todo lo contrario.

Por todo ello hay que concluir que este primer requisito exigido por el artículo 111.2 de la LRJPAC no concurre en este caso.

b.-) Sobre las causas de nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada.

Con relación a su solicitud de suspensión, ASTEL indica que el recurso de reposición interpuesto se fundamenta en una causa de nulidad prevista por la LRJPAC. En concreto, ASTEL alega que la Resolución de 4 de noviembre es nula de pleno derecho de acuerdo con el artículo 62.1.e) que establece que serán nulos los actos "*dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (...)*".

ASTEL alega que la Resolución de 4 de noviembre implica un cambio de definición de mercados y modificación sustancial de las obligaciones que tiene impuestas TESAU por lo que se debería haber seguido, en todo caso, el procedimiento recogido en el artículo 10 de la LGTel.

En este sentido se expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de marzo de 2001 al indicar que:

"No resulta suficiente por último, en contra de lo que se alega, la simple invocación de la existencia de un vicio de nulidad de pleno Derecho de los acuerdos impugnados para que proceda acordar su suspensión cautelar. Esta Sala tiene declarado que la apariencia de buen Derecho sólo puede admitirse en casos en los que la pretensión del recurrente aparezca



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

justificada en forma manifiesta, sin necesidad de un análisis detenido de la legalidad, que está reservado necesariamente al proceso principal.”

Pues bien, sin pretender un análisis detenido de la legalidad, reservado al procedimiento principal de resolución del recurso, al analizar el contenido de este motivo de nulidad, resulta que la presunta vulneración de preceptos de procedimiento alegados de contrario no se deduce a primera vista, ni de manera evidente, sin requerir un examen detenido de las circunstancias concurrentes y de la normativa sectorial de aplicación, en relación con la definición de mercados. Por el contrario, sería necesario entrar en un análisis detallado de la legalidad del acto impugnado que, como ya hemos dicho, está “reservado necesariamente al procedimiento principal”, tal y como afirma el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 23 de marzo de 2001.

ASTEL alega que se ha omitido el procedimiento legalmente establecido, sin embargo, se comprueba del expediente que se han realizado todos los trámites administrativos que corresponden a un procedimiento normal: inicio, alegaciones, audiencia, resolución y notificación. De todas formas, lo que alega ASTEL es que debería haberse seguido el procedimiento “*extraordinario*” de definición de mercados de la LGTel y del nuevo marco regulador (Directivas 2002) y no, en cambio, un procedimiento administrativo “*ordinario*” como ha ocurrido en este caso.

Sin entrar al fondo del asunto, parece que ASTEL plantea en el recurso alegaciones muy similares a las que presentó en la Resolución de 4 de noviembre, en la que se determinó, entre otras cosas, que no se estaban definiendo mercados nuevos sino que simplemente se estaba aplicando la OBA.

De esta manera, en la OBA, el punto cuarto del resuelve de la resolución que la aprueba, de 31 de marzo de 2004, se exigía a TESAU lo siguiente:

“En el caso de desaparición o lanzamiento de modalidades técnicas en los servicios ADSL minoristas ofrecidos por Telefónica de España, S.A.U., este operador deberá presentar a esta Comisión con al menos 3 meses de antelación a su comercialización una propuesta para modificar la OBA, de manera que, de ser necesario, se puedan introducir en esta oferta los cambios necesarios que permitan a los operadores alternativos competir en igualdad de condiciones con la oferta minorista de TESAU.”

Así que analizado el contenido de este motivo de suspensión de un modo tal que no se realiza el enjuiciamiento del fondo del asunto planteado, no se aprecia que el vicio determinante de la pretendida nulidad surja patente y notoriamente y sin necesidad de que deba realizarse nada más que la comprobación de hecho para constatar su existencia (doctrina jurisprudencial sobre la apariencia de buen derecho). Parece a la vista del expediente que, efectivamente, el procedimiento seguido ha sido el correcto así que no se puede estimar que concurra el requisito de nulidad alegado por la recurrente para solicitar la suspensión del acto impugnado.

Por ello, cabe concluir que no se da ninguno de los dos supuestos previstos en la Ley para plantear la suspensión.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO.- Sobre la ponderación entre el interés público y el perjuicio que se causaría al recurrente.

De todo lo anterior, se deduce que no concurre ninguna de las causas que exige el artículo 111 de la LRJPAC para que se pueda acceder a la petición de suspensión de la resolución realizada por ASTEL. Sin perjuicio de esto, esta Comisión considera importante pronunciarse sobre la posibilidad de que se pudiera causar perjuicios en el sentido que lo marca este artículo 111 de la LRJPAC, a saber: *“perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido”*.

ASTEL considera que la suspensión de la resolución recurrida *“no sólo no es contraria al interés público, sino que es conforme a éste (...) En el sector de las telecomunicaciones el interés público se identifica con el incremento de la competencia en el mercado y el beneficio de los usuarios finales, siendo el primero requisito necesario para que se pueda cumplir adecuadamente el segundo”*.

La competencia real y efectiva es una de las mayores preocupaciones tanto de ASTEL como de esta Comisión, así que si tenemos en cuenta el hecho de que ya existen otros operadores que están ofreciendo esta tecnología para el acceso a Internet, que además, estas ofertas son replicables por el resto de los operadores alternativos mediante servicios mayoristas, es razonable no suspender la aplicación de una resolución que permitiría un aumento en la velocidad de acceso a Internet tan requerida tanto por usuarios finales como por operadores.

De todas formas, los hipotéticos perjuicios que pudiera sufrir ASTEL no se deberían a la ejecución inmediata de la resolución, sino que se producirían por la propia resolución en sí misma. Es decir, para que se acuerde la suspensión, de acuerdo con el citado artículo 111.2 de la LRJPAC, esta Comisión habrá de tener en cuenta *“el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido”*.

En todo caso, cabe manifestar a tal respecto que concurre el interés público en la ejecutividad de las Resoluciones de esta Comisión, debido, entre otras causas, a la seguridad jurídica que ello conlleva, seguridad que quedaría afectada en caso de suspensión de los efectos de la Resolución recurrida. Este interés público es, en principio, superior al particular que hipotéticamente tendría el recurrente en la suspensión, por cuanto no se han justificado debidamente los supuestos efectos perjudiciales que la ejecución inmediata de la Resolución pueda tener en relación con los intereses particulares de TESAÚ, los cuales, por otra parte, en todo caso habrían de ponerse en relación con los posibles efectos perjudiciales que para los restantes operadores pudiera tener la suspensión del acto recurrido.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece evidente que la suspensión de la Resolución de 4 de noviembre causa un perjuicio mayor al interés público que el perjuicio que se le pudiera causar a ASTEL por la eficacia inmediata de la misma.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por todo ello, no procede acceder a la solicitud de suspensión planteada por ASTEL en el recurso de reposición que trae causa.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

RESUELVE

ÚNICO.- Denegar la solicitud de medidas cautelares presentada por ASTEL incluida la suspensión de la eficacia inmediata de la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 4 de noviembre de 2005 sobre la modificación de la OBA como consecuencia del lanzamiento por Telefónica de España, S.A.U. de los servicios de acceso a Internet sobre tecnología ADSL2+ denominados "x2+0705_a1" y "ADSL TOP".

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera